

RESOLUCIÓN No.300/15

POR CUANTO: Mediante acuerdo del Consejo de Estado de fecha 21 de marzo de 2012, el que resuelve fue designado ministro de Educación Superior.

POR CUANTO: El Ministerio de Educación Superior tiene la función estatal de dirigir y controlar el sistema de ingreso a la educación superior, acorde con la política trazada por el Gobierno y oído el parecer de los organismos de la administración central del Estado, según lo establecido en el numeral 8 del apartado SEGUNDO del Acuerdo No. 4001 adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 24 de abril de 2001.

POR CUANTO: Es necesario fortalecer la transparencia y preservar la puridad del sistema de ingreso a la educación superior, siendo para ello necesario modificar la Instrucción Ministerial No. 1 de 6 de enero de 2012 “Disposiciones para la Prevención de Riesgos y Posibles Manifestaciones de Fraude en los Diferentes Eventos del Proceso de Ingreso”

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el apartado TERCERO, numeral 4 del Acuerdo No. 2817, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 25 de noviembre de 1994,

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar las “Normas disciplinarias de aplicación para los actos de fraude en los exámenes de ingreso a la educación superior”, las cuales forman parte integrante de esta Resolución.

SEGUNDO: Derogar los artículos del décimo sexto al vigésimo tercero, ambos inclusive, de la Instrucción Ministerial No. 1 de 6 de enero de 2012 “Disposiciones para la Prevención de Riesgos y Posibles Manifestaciones de Fraude en los Diferentes Eventos del Proceso de Ingreso” y cualquier otra disposición de igual o inferior jerarquía en todo lo que se opongan a lo dispuesto por la presente.

TERCERO: La presente entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Notifíquese la presente a los rectores presidentes de las comisiones de ingreso provinciales, a todos los rectores de los centros de educación superior y a cuantas personas naturales o jurídicas deban conocerla a los efectos procedentes.

Archívese el original de la presente en el Departamento Jurídico de este Ministerio.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DADA en La Habana, a los 14 días del mes de octubre de 2015.

“Año 57 de la Revolución”.(fdo.) **Dr. Rodolfo Alarcón Ortiz. Ministro de Educación Superior.**

Jorge Valdés Asán. Jefe del Departamento Jurídico. Ministerio de Educación Superior.

CERTIFICO: que la presente copia es fiel del original de la resolución No.300 de fecha 14 de octubre de 2015, la cual obra en los archivos a mi cargo.

NORMAS DISCIPLINARIAS DE APLICACIÓN PARA LOS ACTOS DE FRAUDE EN LOS EXÁMENES DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ARTÍCULO 1: Los presuntos actos de fraude atribuidos a los aspirantes a ingresar en la educación superior, relacionados con los exámenes de ingreso, serán analizados, juzgados y sancionados según disponen las presentes normas disciplinarias.

ARTÍCULO 2: A los efectos de aplicar estas normas, se consideran aspirantes a ingresar en la educación superior a las personas que hayan formalizado su inscripción con este fin, según el procedimiento establecido.

ARTÍCULO 3: Constituye un acto de fraude en los exámenes de ingreso a la educación superior la apropiación indebida de conocimientos, no adquiridos por su propio esfuerzo. De igual manera se considera el intento de fraude comprobado.

También se considera un acto de fraude ser cómplice o encubrir actos de fraude cometidos por otros aspirantes o personas relacionadas o no con el proceso de ingreso, cuando se pruebe que tenía conocimiento del hecho y no lo denunció para encubrir a los culpables, aunque no obtenga beneficio personal en la ejecución del mismo.

ARTÍCULO 4: Los presuntos actos de fraude, así como las acciones o conductas intencionales, dirigidas a entorpecer el normal desarrollo del proceso de ingreso en cualquiera de sus fases, con el objetivo de beneficiar indebidamente o perjudicar a uno o más aspirantes, que se atribuyan a los profesores, funcionarios u otros trabajadores de la educación superior se juzgan y sancionan aplicando la legislación vigente que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse del hecho.

Las autoridades académicas o administrativas que, por razón de su cargo o funciones, conozcan de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, están obligadas a ponerlo en conocimiento de los órganos competentes para que se depure la responsabilidad penal que se considere pertinente.

ARTÍCULO 5: Las medidas disciplinarias se impondrán a los aspirantes a ingresar en la educación superior que intenten cometer o cometan los actos de fraude aquí tipificados, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se pueda derivar del hecho.

ARTÍCULO 6: El aspirante a ingresar en la educación superior comete fraude en el acto de aplicación del examen de ingreso, cuando:

- a) Es sorprendido consultando información relacionada con la materia que se examina o copiándola en su examen y se puede probar evidentemente;
- b) es sorprendido intercambiando con otro aspirante información de la materia que se está evaluando y se puede demostrar de manera evidente;
- c) durante el acto de calificación se comprueba indudablemente que existe semejanza en las respuestas escritas en los exámenes de dos o más aspirantes, aunque durante la aplicación del examen no se haya descubierto el acto de fraude.

ARTÍCULO 7: El aspirante a ingresar en la educación superior comete intento de fraude en el acto de aplicación del examen de ingreso, cuando:

- a) Tiene disponible información relacionada con la materia objeto de evaluación, sin que llegue a utilizarla en su propio examen y se le ocupa la prueba documental;

- b) intenta transmitir a otro aspirante o recibe información relacionada con la materia objeto de evaluación y se puede probar evidentemente.

ARTÍCULO 8: Cuando el presunto intento o acto de fraude es percibido por alguno de los profesores que cuidan la aplicación del examen, al o los aspirantes implicados se les retira el examen y las evidencias que lo demuestren, si las hubiere.

El jefe de Sede levantará acta con el relato exacto de los hechos, según la declaración del profesor, del o los aspirantes implicados y otros testigos si los hubiere, la cual firman todos y junto con las evidencias que lo demuestren se conforma el expediente inicial para las investigaciones que correspondan. De haber otros aspirantes como testigos del hecho, se les tomarán sus declaraciones después que hayan entregado su examen.

El jefe de Sede informa el hecho sucedido al presidente de la Comisión de Ingreso Provincial y le entrega el expediente inicial.

ARTÍCULO 9: Cuando el presunto acto de fraude es denunciado de forma verbal, la autoridad que recibe la denuncia levantará acta de cuanto exprese el denunciante y la firmarán ambos.

El que reciba la denuncia hará constar la identidad del denunciante y la comprobará por los medios que estime suficientes. El acta de denuncia se entrega al presidente de la Comisión de Ingreso Provincial.

ARTÍCULO 10: Cuando la denuncia se realiza por escrito, quien la recibe la entrega o pone en conocimiento del presidente de la Comisión de Ingreso Provincial de la provincia donde haya sucedido el hecho u otra autoridad de la Comisión.

ARTÍCULO 11: Cuando el presunto acto de fraude se manifiesta durante la calificación de los exámenes, por la posible semejanza en las respuestas escritas en dos o más exámenes, estos se comparan para identificar los elementos coincidentes que demuestren la evidente semejanza de los exámenes. La comparación se realiza en presencia de los miembros del tribunal de calificación y el secretario ejecutivo de la Comisión de Ingreso Provincial.

Si como resultado del análisis se confirma la semejanza de las respuestas escritas en los exámenes, se levanta acta haciendo constar los datos que identifican los exámenes y los elementos probatorios de dicha semejanza, firmada por los participantes en el análisis, la cual, junto con los exámenes integran el expediente inicial, que se entrega al presidente de la Comisión de Ingreso Provincial.

Si en el análisis se concluye que hay dudas porque no es totalmente evidente la semejanza entre los exámenes, se desecha cualquier otra investigación y se cierran las actuaciones dando por terminado el proceso.

ARTÍCULO 12: Para analizar y juzgar los presuntos intentos o actos de fraude atribuidos a los aspirantes a ingresar en la educación superior, relacionados con los exámenes de ingreso, el presidente de la Comisión de Ingreso Provincial designa una Comisión Investigadora de tres miembros, seleccionados de entre los directivos de la institución universitaria, uno de los cuales la presidirá y los otros actuarán como Secretario y Vocal.

ARTÍCULO 13: En caso de dudas para la debida aplicación de lo aquí normado, el presidente de la Comisión Investigadora solicitará el asesoramiento de los asesores jurídicos de la universidad donde se radica el proceso.

ARTÍCULO 14: El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial tiene la facultad de, según las particularidades de cada caso, analizar y decidir si los aspirantes que van a ser expedientados por la Comisión Investigadora por presuntos intentos o actos de fraude, pueden continuar presentándose o no a los exámenes de ingreso de la convocatoria en que sucedió el hecho, hasta que recaiga decisión firme en el expediente que se tramita. La decisión que se adopte se comunica a los implicados por escrito y una copia se archiva en el expediente del proceso.

Contra lo dispuesto por el presidente de la Comisión de Ingreso Provincial no cabe recurso de apelación alguno.

ARTÍCULO 15: La Comisión Investigadora actúa conforme a las siguientes normas:

- a) Informa al presunto infractor los cargos que se le imputan, los derechos que le asisten y el procedimiento a seguir;
- b) cuando son varios los presuntos infractores o testigos, entrevista a cada uno por separado;
- c) no formula preguntas capciosas, sugestivas ni impertinentes;
- d) a los testigos se les instruye que tienen el deber de manifestar la verdad y declarar sobre los hechos que hayan presenciado o sobre los aspectos que realmente conocen y les constan;
- e) una vez que el entrevistado haya leído su declaración, si está conforme la firma o solicita la modificación de aquellas partes que no concuerden con lo que haya expresado.

ARTÍCULO 16: La Comisión Investigadora efectúa las diligencias siguientes:

- a) Recibe las pruebas documentales o materiales del caso, si existen, y se informa sobre los resultados de la investigación inicial;
- b) toma declaración al presunto infractor y los testigos, por escrito y bajo firma;
- c) practica de oficio o a instancia de parte, cualquier otra diligencia de prueba que proceda;
- d) asesora a los aspirantes en cuanto a sus deberes y derechos y sobre el procedimiento a seguir.

ARTÍCULO 17: El aspirante sujeto a proceso que es citado por la Comisión Investigadora para instruirlo de cargos o realizar otra diligencia necesaria, de no comparecer sin causa justificada, se seguirá a su perjuicio la tramitación del proceso investigativo hasta su terminación.

No obstante lo anterior, el aspirante sujeto a proceso puede en cualquier momento, durante la etapa de instrucción del expediente, personarse ante la Comisión Investigadora presentando sus descargos por escrito.

ARTÍCULO 18: La Comisión Investigadora realiza sus actuaciones en un término de cinco días hábiles. El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial concede hasta tres días hábiles más por causas que a su juicio considere excepcionalmente justificadas, por lo que, en ningún caso, el cómputo del término para la práctica de las actuaciones será mayor de ocho días hábiles.

ARTÍCULO 19: Terminadas sus actuaciones, la Comisión Investigadora formula sus conclusiones, en las que precisa los hechos que considera probados y las pruebas que lo demuestran. Las conclusiones se entregan al presidente de la Comisión de Ingreso Provincial, el cual si está de acuerdo, dicta la resolución o escrito fundamentado correspondiente.

ARTÍCULO 20: Cuando el presidente de la Comisión de Ingreso Provincial discrepa de las conclusiones acordadas por una Comisión Investigadora, debe analizar su discrepancia con los miembros de la Comisión, para ello solicita la participación de la Asesoría Jurídica para un mejor análisis.

ARTÍCULO 21: La Comisión Investigadora que, al investigar una denuncia que recibe, estime que no existen pruebas para dar el hecho por probado lo acordará así, por unanimidad o mayoría de sus miembros, elevando dicho acuerdo al presidente de la Comisión de Ingreso Provincial, dentro de las 24 horas hábiles de haberlo adoptado.

El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial puede aceptar el acuerdo y ordenar el sobreseimiento del expediente sin más trámites o designar una nueva Comisión para que conozca del hecho, la cual, de coincidir con la anterior en la falta de pruebas, hará obligatorio el sobreseimiento del expediente que se archiva en la Comisión de Ingreso Provincial. Si la nueva Comisión llega a otra conclusión continúa su curso el procedimiento establecido.

ARTÍCULO 22: El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial es la autoridad competente para sancionar los actos de fraude descritos en la presente norma.

ARTÍCULO 23: El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial dicta resolución o escrito fundamentado dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de las actuaciones de la Comisión Investigadora. Las resoluciones o escritos fundamentados se notifican con la entrega de copia literal de los mismos.

ARTÍCULO 24: El presidente de la Comisión de Ingreso Provincial debe adecuar e imponer una sanción justa mediante resolución fundada, dentro del término señalado en cada caso. A ese efecto aplicará la medida a imponer de entre las varias que se establecen, tomando en cuenta la gravedad del acto cometido y el resultado del análisis de los testimonios presentados.

Contra lo que decida el presidente de la Comisión de Ingreso Provincial no cabe recurso alguno.

ARTÍCULO 25: Las sanciones que se pueden imponer a los aspirantes a ingresar en la educación superior, son las siguientes:

- a) Para los actos de fraude comprobados, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pueda incurrir:
 - 1. Invalidar los exámenes realizados y suspender el derecho de presentación a exámenes de ingreso a la educación superior durante tres años, contado el año de aplicada la sanción;
 - 2. Invalidar los exámenes realizados y suspender el derecho de presentación a exámenes de ingreso a la educación superior durante dos años, contado el año de aplicada la sanción;

3. Invalidar los exámenes realizados y suspender el derecho de presentación a exámenes de ingreso a la educación superior en las convocatorias del año en curso, si existieran;

b) Para el acto de intento de fraude comprobado:

1. Invalidar el examen de la asignatura en que intentó cometer fraude, teniendo derecho a examinarla en la siguiente convocatoria, si existiera.

En todos los casos el expediente del proceso y la resolución de sanción se archivan en la Comisión de Ingreso Provincial por 15 años.